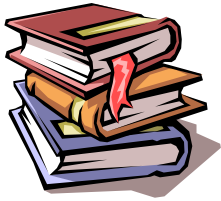


## HECHOS & DERECHOS: CONSULTORÍA JURÍDICA INTEGRAL



Jorge Danilo Guarín Obando  
Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali  
Miembro de la Colegiatura de abogados litigantes  
Carrera 5 # 12-16, Oficina 903, Edificio Suramericana  
Teléfono Móvil 313-6862684  
Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia  
E-mail: daniloguarin@yahoo.com – daniloguarin@gmail.com

Santiago de Cali, Mayo 04 de 2016

Señores

Juzgado administrativo de oralidad circuito judicial de Cali (reparto)

E. S. D.

**Asunto : Medio de control de reparación directa**

**Accionante : 1. Erika Rodríguez Olarte (actora)**  
**Accionante : 2. Orfilia Olarte Mancera (madre)**  
**Accionante : 3. Eduan Rodríguez Olarte (hermano)**  
**Accionante : 4. María Oneida Rodríguez Olarte (hermana)**  
**Accionante : 5. María Orfilia Rodríguez Olarte (hermana)**  
**Accionante : 6. Verónica Rodríguez Olarte (hermana)**  
**Accionante : 7. José Libardo Rodríguez Olarte (hermano)**  
**Accionante : 8. Lina María Rodríguez Olarte (hermana)**  
**Accionante : 9. John Jairo Rodríguez Olarte (hermano)**  
**Accionante : 10. Luz Marina Rodríguez Olarte (hermana)**  
**Accionante : 11. Luis Hernando Rodríguez Olarte (hermano)**

**Accionado: La Nación Colombiana: Ministerio de Defensa Nacional  
Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional**

-----

Jorge Danilo Guarín Obando, mayor de edad, domiciliado y residente en Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía # 16.613.613 expedida en Cali, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional # 104.906 del C. S. J, actuando en nombre y representación de las siguientes personas: **Erika Rodríguez Olarte**, (directa afectada), **Orfilia Olarte Mancera** en calidad de madre de Erika Rodríguez Olarte; **Eduan Rodríguez Olarte**, **María Oneida Rodríguez Olarte**, **María Orfilia Rodríguez Olarte**, **Verónica Rodríguez Olarte**, **José Libardo Rodríguez Olarte**, **Lina María Rodríguez Olarte**, **John Jairo Rodríguez Olarte**, **Luz Marina Rodríguez Olarte** y **Luis Hernando Rodríguez Olarte** en calidad de hermanos de Erika Rodríguez Olarte, actuando en nombre y representación de los antes mencionados a través de poder debida y legalmente conferido, por medio del presente escrito y en ejercicio del medio de control consagrado en el Art. 140 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y Ley 1395 de 2010, una vez cumplido el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría

General de la Nación delegada ante lo jurisdicción contenciosa administrativa, radicando la solicitud de conciliación en Febrero 09 de 2016, correspondiendo el trámite prejudicial a la Procuraduría 60 judicial I para asuntos administrativos, entidad que ha declarado fallida la pretensión de conciliación propuesta por la parte actora, indicando en numeral 3 de la constancia expedida en Mayo 03 de 2016 lo siguiente: “3. Llegado el día de la audiencia de conciliación, el **VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2016 A LAS 10.30 AM**, no se hizo presente el apoderado de la parte convocada por lo que se les concedió el término de tres (3) días para que justificara su inasistencia; transcurrido el término anterior sin que el ausente justificara su no comparecencia, este Despacho, consideró que no existía ánimo conciliatorio de la parte convocada y dio por agotada la etapa conciliatoria”. 4. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – CPACA-“ adjuntando la constancia expedida por la Procuraduría 60 judicial I para asuntos administrativos en cabeza de Eduardo Silva Orozco, radicación N° 43338 de 09 de Febrero de 2016 que en su parte final dice: “Dada en Santiago de Cali, a los tres (3) días del mes de Mayo del año 2016...”. Agotado dicho requisito de procedibilidad presentamos el medio de control anunciado acorde a lo establecido en la Ley 1437 de Enero 18 de 2011, Capítulo III, requisitos de la demanda, artículo 162: “**Contenido de la demanda.** Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá”.

1. **Designación de las partes:** Art. 162, numeral 1: “**La designación de las partes y sus representantes**”.
- 1.1. **Accionantes:** Erika Rodríguez Olarte, (directa afectada), Orfilia Olarte Mancera en calidad de madre de Erika Rodríguez Olarte; Eduan Rodríguez Olarte, María Oneida Rodríguez Olarte, María Orfilia Rodríguez Olarte, Verónica Rodríguez Olarte, José Libardo Rodríguez Olarte, Lina María Rodríguez Olarte, John Jairo Rodríguez Olarte, Luz Marina Rodríguez Olarte y Luis Hernando Rodríguez Olarte en calidad de hermanos de Erika Rodríguez Olarte.
- 1.2. **Accionado:** La Nación Colombiana-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas militares de Colombia-Ejército Nacional, cuyo representante legal es el Ministro de defensa nacional Luis Carlos Villega Echeverri, o a quien haga sus veces en el momento de la notificación del presente medio de control, o a su reemplazo temporal y/o permanente.
- 1.1. **Interviniente:** La Nación Colombiana: **Agencia jurídica nacional de defensa del Estado**, su representante legal es la Directora de esta entidad Dra. Adriana María Guillén Arango o quien haga sus veces en el momento de la notificación del presente medio de control, o su reemplazo temporal y/o permanente. La dirección para la notificación es: Calle 70 # 4-60, teléfono 2558955, Ext. 432, Fax

2. **Declaraciones y condenas:** Artículo 162, numeral 2. *“Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones”.*
- 2.1. Declárese que la parte accionada, La Nación Colombiana: **Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas militares de Colombia-Ejército Nacional**, son responsables individual y solidariamente, en razón del daño antijurídico derivado de las lesiones, abuso de autoridad, maltrato y vulneración de la dignidad en la humanidad de **Erika Rodríguez Olarte**, de la totalidad de los perjuicios morales subjetivos, materiales (patrimoniales), lucro cesante presentes y futuros, daño emergente y daño a la vida en relación, padecidos por quienes me han dado la representación para el presente medio de control de reparación directa, siendo ellos **Erika Rodríguez Olarte**, (directa afectada), **Orfilia Olarte Mancera** en calidad de madre de Erika Rodríguez Olarte; **Eduan Rodríguez Olarte**, **María Oneida Rodríguez Olarte**, **María Orfilia Rodríguez Olarte**, **Verónica Rodríguez Olarte**, **José Libardo Rodríguez Olarte**, **Lina María Rodríguez Olarte**, **John Jairo Rodríguez Olarte**, **Luz Marina Rodríguez Olarte** y **Luis Hernando Rodríguez Olarte** en calidad de hermanos de Erika Rodríguez Olarte, afectados moral y materialmente con la lesión causada a Erika Rodríguez Olarte, el abuso de autoridad, el maltrato y la vulneración a la dignidad, hechos ocurrido el día 15 de Febrero de 2014 en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca, por parte de miembros del Ejército Nacional adscritos al grupo denominado Fuerza Especial del batallón Palacé acantonado en la ciudad de Buga.
- 2.2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la **Nación Colombiana: Ministerio de defensa nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional**, a pagar a los anteriores accionantes la totalidad de los perjuicios morales subjetivos, el daño a la vida en relación y materiales (patrimoniales), lucro cesante y daño emergente presentes y futuros causados por la lesión, abuso de autoridad, maltrato y vulneración de la dignidad de su directo familiar –Erika Rodríguez Olarte- afectados moral y materialmente.
- 2.3. El pago equivalente a los daños morales subjetivos y daño a la vida en relación y materiales (patrimoniales), lucro cesante y daño emergente presentes y futuros causados a los accionantes, se hará con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año en que se pague en su totalidad la sentencia por las entidades obligadas a ello. Igualmente, si en el trámite de esta acción se producen

modificaciones legislativas favorables sobre este tópico, se reconocerá por el daño moral causado a los demandantes la suma máxima que autorice la ley vigente al momento de proferir el fallo definitivo como indemnización por daño no valorable pecuniariamente.

- 2.4. El pago de lo decidido y aprobado por autoridad judicial competente, será actualizado de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C. C. A. Todo pago, así lo ordenará previamente el fallo, se imputará primeramente a los intereses. Se ordenará igualmente dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del C. C. A., para cuyos efectos se expedirán copias de la sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a la parte accionada y accionante. De igual manera se procederá como lo ordena el artículo 195 de la ley 1437 de 2011, las sumas de dinero que la autoridad judicial haya aprobado. Pretende la parte convocante mediante este trámite que se efectúen por las partes convocadas los siguientes reconocimientos:
- 2.5. **Por daño moral.-** Se reconozca y pague por la parte accionada, como consecuencia de la declaración de responsabilidad, a favor de cada uno de los accionantes una indemnización por concepto del daño moral experimentado por ellos, de la manera que a continuación se indica:
  - 2.5.1. Para **Erika Rodríguez Olarte**, directamente afectada, **cien (100)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos (\$689.454)**, sería la suma de **sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos (\$68.945.400)** moneda legal vigente en Colombia.
  - 2.5.2. Para **Orfilia Olarte Mancera**, madre de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cien (100)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos (\$689.454)**, sería la suma de **sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos (\$68.945.400)** moneda legal vigente en Colombia.
  - 2.5.3. Para **Eduán Rodríguez Olarte**, hermano de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones**

**cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.

- 2.5.4. **Para María Oneida Rodríguez Olarte, hermana** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.5. **Para María Orfilia Rodríguez Olarte, hermana** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.6. **Para Verónica Rodríguez Olarte, hermana** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.7. **Para José Libardo Rodríguez Olarte, hermano** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.8. **Para Lina María Olarte, hermana** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones**

**cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.

- 2.5.9. **Para John Jairo Rodríguez Olarte, hermano** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.10. **Para Luz Marina Rodríguez Olarte, hermana** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.11. **Para Luis Hernando Rodríguez Olarte, hermano** de Erika Rodríguez Olarte, la suma equivalente a **cincuenta (50)** salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes al día del pago de la sentencia, considerando que el SMLM vigente es de **seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos (\$689.454)**, sería la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos pesos (\$34.472.700)** moneda legal vigente en Colombia.
- 2.5.12. Total **daño moral** a la fecha de presentación del medio de control de reparación directa: corresponde a la suma de seiscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (650 SMLMV), equivalentes a **cuatrocientos cuarenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil cien pesos (\$448.145.100)** moneda legal vigente en Colombia.
3. **Los hechos y omisiones que sirven de fundamento:** Art. 162, numeral 3: *“Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados”*.
- 3.1. Durante más o menos quince (15) años **Erika Rodríguez Olarte** ha realizado su trabajo como transexual en la carrera 24 con calle 28 del municipio de Tuluá –Valle del Cauca-, lugar acreditado por ERIKA y sus compañeras, en tanto es el sitio conocido por quienes acuden con frecuencia al mismo por la atracción que tienen, por la amistad y en pro de una relación sexual con personas de la comunidad conocida a

nivel nacional e internacional con la sigla LGTBI, (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales), en tanto la actividad de esta comunidad es aceptada por el cuerpo social en nuestro país, es un trabajo reconocido por la sociedad y desde la jurisprudencia nacional e internacional, en el caso nuestro por la Corte Constitucional<sup>1</sup>; trabajo que Erika Rodríguez Olarte y sus compañeras realizaban diariamente en el espacio urbano antes indicado.

- 3.2. Coherente con lo anterior, el **día 15 de Enero de 2014** aproximadamente a las 3.00 de la mañana Erika se encontraba con varias compañeras de la comunidad LGTBI (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales) en la **carrera 24 con calle 28 esquina** del municipio de Tulúa, Valle del Cauca, realizando su trabajo toda vez que Erika y sus compañeras desempeñan, realizan y devengan sus ingresos de la actividad laboral como trabajadoras sexuales lo cual para esa noche y madrugada hacían en completa calma, tranquilidad y sin generar molestia a vecinos y/o ciudadanía en general.
- 3.3. Para ese momento y día antes enunciado observan la actora y sus compañeras que llega un componente del Ejército Nacional. Al darse cuenta de la presencia de los agentes estatales, Erika y sus amigas que se encontraban en la dirección antes indicada se corren media cuadra más abajo, tal como habían acordado más o menos dos años antes con el comandante y/o responsable del pelotón militar que se alojaba a una esquina del lugar frecuentado por la comunidad LGTBI antes mencionada, habida cuenta que desde Junio 06 de 2013 pernoctaba en la parte urbana –céntrica- el denominado **grupo de fuerzas especiales** asignado a la ciudad de Tulúa por el Ejército Nacional.
- 3.4. Para el inicio de la noche del 14 de Febrero de 2014 el grupo de fuerzas especiales del Ejército Nacional **no se encontraba en el lugar acostumbrado, al que habían llegado desde Junio 06 de 2013**, por lo que el grupo de trabajadoras sexuales –LGTBI- del que hace parte **Erika Rodríguez Olarte** se ubican en la carrera 24 calle 28 esquina, parte céntrica y urbana del municipio de Tulúa, Valle del Cauca, y al darse cuenta de la llegada del grupo de fuerzas especiales del Ejército Nacional al que ya conocían con anterioridad, **más o menos a las 3.00 de la mañana del 15 de Febrero de 2014** se corren hacia un parasol como generalmente lo han venido haciendo y además se acordó con los militares en un acuerdo de respeto y buen trato.
- 3.5. Al estar en el parasol y no en la carrera 24 con calle 28 esquina se acerca un soldado del grupo de fuerzas especiales a los miembros de

---

<sup>1</sup> Sentencia Corte Constitucional T-

la comunidad LGTBI. las insulta con palabras soeces, indignas, las maltrata de palabra y afirma que las trabajadoras sexuales tenían que quedarse calladas porque ellos estaban muy cansados y querían dormir y de no hacerlo, utilizarían la fuerza. El soldado que las agredía y maltrataba verbalmente era de apellido **Palacios**, quien además en tono amenazante ante las palabras de la actora de llamar a la Policía Nacional para no ser atropelladas, les dice: ***“Llame a la policía que la policía me la meto por el culo con patrulla y todo”***. (Negrillas son nuestras).

3.6. Al escuchar lo anterior, la actora se dirige a buscar al Capitán **Gutiérrez** comandante del grupo de fuerzas especiales antes indicado, pero al llegar a la carrera 24 con calle 28 esquina un soldado acciona una granada de gas lacrimógeno, se la tiran a la humanidad de la actora, ésta afortunadamente golpea sus pies, es lesionada en su integridad personal, ella y dos de sus compañeras salen corriendo y al ver que corrían, los soldados del Ejército Nacional miembros del grupo de fuerzas especiales accionan otras dos granadas contra ellas, sucediendo que una de las trabajadoras sexuales de la comunidad LGTBI de nombre **Violeta** se desmaya por efecto de los gases lacrimógenos y a otra compañera en la carrera de evitar el golpe de la granada y efecto de los gases se dobla el tobillo, lesionándose el mismo. El actuar de la fuerza pública representada en los miembros del grupo de fuerzas especiales del Ejército Nacional de Colombia bajo el comando del Capitán **Gutiérrez** contra la actora y sus compañeras fue desmedido, violento, arbitrario, se abusó de la autoridad que tienen como fuerza pública (miembros del Ejército Nacional) y sobre todo, fue un comportamiento absolutamente innecesario en tanto la comunidad LGTI no estaba inquietando a los militares presentes en ese sector, no los estaba molestando ni agrediendo física o verbalmente, atentando entonces los miembros del Ejército Nacional ya mencionados contra la vida e integridad personal, contra la dignidad de quienes en pro de su trabajo y miembros de la comunidad LGTBI se encontraban en el parasol antes indicado en la madrugada y hora antes indicada, es decir, 3.00 am del 15 de Febrero de 2014.

3.7. Ante esa grave situación de atentar contra la vida e integridad personal de **Erika Rodríguez Olarte** y sus dos compañeras, la actora se comunica telefónicamente con la Intendente de la Policía Nacional de nombre **Estela** encargada de la oficina de Derechos Humanos del Distrito de Policía en la ciudad de Tulúa, quien atiende la llamada, aseverando que enviaría una patrulla de la Policía Nacional al lugar de los hechos, lo cual efectivamente aconteció, llegando dos patrullas motorizadas compuesta por cuatro agentes de policía, entre ellos una mujer, para lo cual Erika de manera inmediata



fue a dialogar con los agentes policiales, convocando al **Capitán Gutiérrez** del grupo de fuerzas especiales adscritos al municipio de Tulúa, que como dijimos antes, desde Junio de 2013 estaban pernoctando en la carrera 24 con calle 28 esquina de dicho municipio.

- 3.8. Más o menos a los treinta minutos de llegar las dos patrullas motorizadas al lugar de los acontecimientos, el **Capitán Gutiérrez** acceder a bajar del lugar donde se encontraba, Erika habla con el mencionado Capitán en presencia de las patrullas motorizadas, manifestando el oficial que: **“Arreglemos por las buenas”**, después la policial de nombre **Martha** le pregunta a la actora: *“Hasta qué circunstancias va a llevar eso”*, respondiendo que iba a hacer la denuncia pública, y en actitud displicente frente a los hechos un agente del orden expresa: *“Para que nos han llamado si no podemos hacer nada”*.
- 3.9. Posteriormente el Capitán **Gutiérrez** manifiesta a la actora que *“Controle a las chicas que yo me hago cargo de los soldados”* cuando los miembros de la comunidad LGTBI nunca actuaron contra los soldados a cargo del mencionado capitán y ellas no estaban descontroladas, por lo menos antes de ser agredidas por los soldados al lanzar contra ellas las granadas lacrimógenas, lo cual hicieron sin ninguna necesidad y sin existir presencia de multitud que hubiese necesidad de dispersar por obstaculizar la movilidad o actuar contra la fuerza pública. Lanzar las granadas contra la humanidad de la actora y sus compañeras fue un acto violento, arbitrario, innecesario y fundamentalmente un acto no propio de las funciones de los miembros del Ejército Nacional.
- 3.10. Es de anotar que la Policía Nacional a través de las dos patrullas motorizadas que llegaron al lugar donde fueron agredidas las trabajadoras sexuales, no actuó debidamente en la protección de las personas agredidas, por el contrario, se reclama a Erika Rodríguez Olarte del por qué llama a la Policía Nacional, desconociendo que fue ella quien afrontó a los militares por la agresión de la que fueron objeto, de ahí que la policial **Martha** le inquiera de la siguiente manera: *“¿Hasta qué circunstancias va a llevar esto?”*, respondiendo la actora que haría la denuncia pública ante las autoridades competentes, medios de comunicación como “Voz de los Robles, a la ONG de derechos humanos “ECATE”, al periódico “Extra” y otros medios de comunicación.
- 3.11. Respecto a las lesiones sufridas por la actora debido a la agresión de los miembros del Ejército Nacional denominado **Grupo de fuerzas especiales** asignado al municipio de Tuluá, Valle del Cauca, son las

siguientes: la pierna izquierda fue quemada por el impacto de la granada lacrimógena, diagnosticado por el Instituto Nacional de Medicina Legal de la ciudad de Tuluá por solicitud de la Fiscalía General de la Nación de dicha ciudad con varios días de incapacidad. Su compañera **Violeta** sufrió desmayo por el ahogo que los gases causaron en su humanidad y la compañera **Andrea** se lesionó un tobillo al tratar de esquivar las granadas y evitar el ahogo de los gases lacrimógenos.

- 3.12. Referente a observar y darse cuenta quién o quiénes fueron los soldados del grupo de fuerzas especiales que realizaron la agresión, Erika Rodríguez Olarte claramente expresa que la agresión la originó el soldado **Palacios**, haciendo una descripción del mismo así: “... *soldado de apellido PALACIO ya que **es homofóbico, siempre hemos tenido problemas con él**, afrodescendiente, bajito, gordito*”; mencionado otro soldado sin referir su nombre, pero describiendo así: “*costeño, delgado, blanco, estatura media, de unos treinta años de edad*”, soldados que después de actuar agresivamente contra las ya reseñadas abusando de su autoridad y de su condición de militares, evaden su responsabilidad y el Capitán Gutiérrez nada hace por llamar la atención a quienes actuaron contra la actora y sus compañeras lanzando las granadas lacrimógenas, generando pánico y terror entre ellas, toda vez que no ha sido interés ni están motivadas para asumir tal situación, sobre todo cuando no existía justificación para que los soldados Palacios y el Costeño lanzaran esos artefactos explosivos y de ahogamiento contra las trabajadoras sexuales que se encontraban en el parasol cercano al lugar donde pernoctaban los miembros del grupo especial ya mencionado. Es de anotar que ante la Fiscalía la actora manifestó lo siguiente respecto al soldado PALACIO: “*el otro es el soldado de apellido PALACIO ya que **es homofóbico (sic) siempre hemos tenido problemas con él***”, es decir, lo conoce debido a la molestia que reiteradamente causa dicho soldado a la comunidad LGTBI que se mantiene por el lugar antes indicado en horas de la noche y madrugada en la actividad laboral que realizan.
- 3.13. Antecedente que aunque no tenga relación directa con los hechos que se recogen en el presente medio de control, sí es importante anotar el siguiente acontecimiento ocurrido en Septiembre 25 de 2012 así: Erika Rodríguez Olarte recibió amenaza telefónica del móvil 3184920602 a las 5.04 de la tarde, investigación que cursa en la Fiscalía 23 seccional de Tulúa, radicación 76834-60-00-187-2014-00593-00, amenaza que decía: “*Perra malparida, usted no entendió el mensaje, deje de estar defendiendo los derechos de esas malparidas, siga de sapa y va a ver cómo le va, váyase de Tuluá, se lo advertimos*”. Lo anterior dificulta el trabajo de Erika y así lo dejó consignado en la denuncia; por lo anterior, la Fiscalía expide al Comandante estación de Policía

Nacional de Tuluá, Valle del Cauca oficio en Febrero 07 de 2014 “Solicitud de medida de protección” indicando: “De conformidad con lo señalado en el preámbulo artículos 1, 2, 22, 42 y 218 entre otros de la Constitución Política... normatividad que establece la adopción de medidas necesarias para la **atención y protección de las víctimas, en especial la garantía de su seguridad personal y familiar**, me permito solicitarle se realicen las actividades pertinentes para proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad a la señora ERIKA RORÍGUEZ OLARTE... y a su núcleo familiar... por el delito de **AMENAZAS**... por el término de dos (2) meses...”.

- 3.14. A lo anterior, es decir, a la solicitud de medidas de protección solicitadas por la Fiscalía General de la Nación seccional Tulúa, la Policía Nacional se limita a entregarle a la actora un acta titulada: “Acta de medidas de seguridad y/o autoprotección para personas amenazadas” como si éstas fueran suficientes para proteger al ciudadano en tanto descargan la responsabilidad en la persona amenazada y se deslinda de responsabilidad la Policía Nacional, siendo dicha acta un sofisma de distracción y de mostrar actividad policial en prodel ciudadano que acude ante la autoridad judicial y fuerza pública.
- 3.15. En Febrero 20 de 2014 es de anotar que Erika Rodríguez Olarte presentó denuncia penal por hechos ocurridos el 15 de Febrero de 2014, lo cual hizo ante la Fiscalía General de la Nación, extractando lo siguiente: “Yo soy lideresa TRANS de la comunidad LGTBI aquí en la ciudad de Tulúa Valle, el sábado a las 3.00 de la mañana me encontraba en compañía de unas compañeras de trabajo de nombre VIOLETA VALENCIA, LUISA CARMONA, CARLA N, SARA N, CRISTINA N, ANDREA N, CECILIA, estábamos ubicadas en la carrera 24 con calle 28 esquina aquí en Tulúa Valle, al ver que llegaron dos camiones con efectivos del ejército, por tal motivo decidimos bajar media cuadra más donde acordamos estar allí mientras los del ejército están ahí, tal como quedó acordado con el comandante de ese grupo (sic), después de eso apareció un soldado insultándonos y agrediéndonos verbalmente (sic) y se fueron dos de las chicas para hablar con el soldado y ver qué era lo que pasaba y detrás me fui yo para tratar de hablar con el capitán a cargo de este grupo, **al llegar a la esquina accionaron una granada de gas lacrimógeno la cual me cayó en una pierna afectándome mi pierna izquierda**, con ocasión a esto VIOLETA VALENCIA se desmayó al absorber el gas, otra compañera por salir corriendo se dobló el tobillo y posteriormente accionaron dos granadas más cuando llegamos a tratar de dialogar con el soldado que nos agredió verbalmente y le dije que iba a llamar a la policía este soldado en tono amenazante y grosero y nos dijo llame a la policía que **la policía me la meto por el culo con patrulla y todos** (sic), yo llegué hasta el CAI de policía para que por favor llamaran a la intendente STELLA que es la encargada de Derechos Humanos de parte de la policía, ella me envió una patrulla (sic) la cual no estaban

*dispuestas a bajarse de ella (sic) argumentando que ellos qué podían hacer (sic) ya después de tanto pedirles el favor que nos ayudaran decidieron bajar y así mismo ir a hablar con el CP GUTIÉRREZ del Ejército, él me dijo que arregláramos las cosas por las buenas, que él se encargaba de esos muchachos y yo de mis muchachas (sic), una policía fémina llamada MARTHA me dijo que yo qué pensaba hacer y le contesté que lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias”.*(Negrillas fuera de texto).

- 3.16. En la denuncia entablada por la actora se pide que haga una descripción de los soldados, los cuales describe así: *“Uno estatura media, blanco, contextura media, de acento costeño, de unos treinta años de edad, el otro es el soldado de apellido PALACIO ya que es homofóbico (sic) siempre hemos tenido problemas con él”*. Termina la denuncia la actora expresando: *“... yo como defensora de **Derechos Humanos** me siento insegura y perseguida ya que el día lunes que estuve en la Procuraduría denunciando estos hechos en la terminal de transportes un sujeto nos tomaba fotografías, inclusive le alcancé a tomar fotos a este sujeto las cuales tengo en mi celular y en el de otra compañera (sic).*(Negrillas fuera de texto).
- 3.17. Por los hechos ocurridos el 15 de Febrero de 2014 con unidades del grupo de fuerzas especiales del Ejército Nacional asignado al municipio de Tuluá y que pernoctaban en la carrera 24 con calle 28 esquina de dicho municipio, la actora presenta denuncia ante el Ministerio Público-Personería Municipal de Tuluá Nit 821001841-0 intitulada: *“Denuncia que formulan las lideresas trans Erika Rodríguez Olarte, identificada con la cédula de ciudadanía N° 94.394.049 expedida en Tuluá y Violeta Valencia Ibáñez”*. En ésta narran todo lo acontecido con el mayor detalle, corroborando lo denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
- 3.18. Teniendo en cuenta que los soldados son miembros del Ejército Nacional adscritos al grupo de fuerzas especiales en Tuluá, la actora presenta en Febrero 17 de 2014 queja disciplinaria en el Ministerio Público ante el Procurador provincial de Buga Mauricio Geovanny Rojas con el siguiente ítem: *“Radicado de denuncia por amenazas de muerte y exceso de autoridad-soldados miembros del grupo de fuerzas especiales Batallón Palacé-Buga”*, anexando la denuncia realizada ante la Personería municipal de Tuluá, requiriendo además: *“Solicitamos amablemente compulsar copia a la Dirección de DDHH del Ejército para lo pertinente”*, entidad que el 21 de Abril de 2014 remite oficio # 1016 al señor Coronel **Jorge Iván Monsalve Hernández** así: *“Remisión RC0352... adjunto al presente se allega el registro de correspondencia que se relaciona a continuación para los fines pertinentes: RC 0352 Queja formulada ante la Personería de Tuluá Valle, por Erika Rodríguez Olarte, contra soldados*

*miembros del Grupo Fuerzas Especiales del Batallón Palacé de Buga, por presuntas amenazas de muerte y exceso de autoridad. Consta de tres folios”.*

- 3.19. Por la queja presentada en la Procuraduría Provincial de Buga, se allega la misma al Batallón Palacé de Buga, por lo que mediante oficio # 003050 de Mayo 06 de 2014 suscrito por el Teniente Coronel **Víctor Manuel Mendoza Cubides** oficial de operaciones Tercera Brigada, se dirige al Teniente Coronel **Gerson Buitrago Medina** Comandante batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de Buga, Valle del Cauca indicando: *”Con toda atención, de acuerdo a lo señalado en artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito remitir el oficio del asunto, emanado por la **PROCURADURÍA PROVINCIAL DE BUGA**, en el cual adjunta queja de la Personería Municipal de Tulúa, interpuesta por la señora ERIKA RODRÍGUEZ OLARTE.*

*En atención a lo anterior, se requiere que esta unidad táctica adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, **teniendo en cuenta que son integrantes de la comunidad LGTBI**. De la misma manera **deberán dar respuesta a la solicitud del peticionario, a la Personería Municipal de Tulúa y a esa Provincial... dentro de los términos legales**, y enviar copia de las acciones adelantadas a esta unidad operativa menor con **plazo 12 de Mayo de 2014**”.* (Negrillas sin subraya son nuestras). Debemos manifestar que hasta el momento de presentar la presente solicitud de conciliación ninguna autoridad militar ha dado la respuesta pertinente.

- 3.20. En el hostigamiento y agresión verbal que realizan algunos soldados miembros del Ejército Nacional del grupo de fuerzas especiales del Batallón “Batalla de Palacé” causan a la lideresa de de derechos humanos de la comunidad LGTBI en el municipio de Tulúa, se presenta incidente por un soldado el día 25 de Octubre de 2014, soldado que amenazó con lanzar una granada de gas hacia la humanidad de la actora manifestando que ellas, refiriéndose a la comunidad LGTBI **“Ustedes son una basura”**. La descripción de dicho soldado es la siguiente: *“teñ blanca, estatura 1.74 más o menos, monito”*, afirmación que vulnera de manera crasa y violenta la dignidad del ser humano cualquiera que sea, pero mucho más si se lanza contra una persona o comunidad discriminada como ha sido la comunidad LGTBI. De esa agresión se presentó en Octubre 27 de 2014 denuncia en la Personería Municipal de Tulúa, Valle del Cauca (02 folios). (Negrillas son nuestras).

- 3.21. En Noviembre 25 de 2014 la Fiscalía segunda local de Tulúa, Valle del Cauca en oficio # 768346000188201400778 responde derecho de petición de la actora indicando: *“... así mismo se solicitó al teniente coronel*

*Marco Antonio Castillo Velasco, comandante del Batallón Palacé de Buga, informar a este despacho para la fecha del 14 de Febrero del año en curso, qué patrulla operaba en el sitio de los hechos y cuántas personas la integraban. Teniéndose que aún a la fecha no ha llegado respuesta integral a la respectiva orden, por lo cual se procederá a reiterar el cumplimiento de lo solicitado por esta Fiscalía y una vez se obtenga la información necesaria se procederá la decisión que corresponda frente al referido caso”,* documento suscrito por **Rubiela Ospina Cardona**, fiscal segunda local. De ahí que en la misma fecha –Noviembre 25 de 2014- la Fiscalía remite nuevo oficio al Teniente coronel **Marco Antonio Castillo Velasco**. Solicitando la información anterior, además de *“Así mismo se requiere información con respecto a reporte alguno que se presentara por parte de estas patrullas, sobre la necesidad de utilizar elementos y/o armas asignadas al grupo para el evento de algún tipo de disturbio, en caso cierto la instrucción entregada a los uniformados por el uso de estos contra la ciudadanía”*. Debemos indicar la contumacia del Teniente Coronel Castillo Velasco y/o del Comandante del Batallón “Batalla de Palacé” al no responder el requerimiento de la Fiscalía segunda local de Tuluá, el que ya se hizo en dos ocasiones, en tanto a la Fiscalía no ha llegado respuesta, desconociendo que es un deber de la autoridad militar actuar en consonancia, armonía y colaboración con la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía General de la Nación y no puede ni debe evadir la información solicitada.

- 3.22. En Enero 19 de 2016 la Personería Municipal de Tuluá Valle entrega a la actora certificación referente a la denuncia presentada el 17 de Febrero de 2014 ante dicha entidad estatal, por los hechos acaecidos el 15 de Febrero de 2014. Que de ello se puso en conocimiento al Capitán **Gutiérrez comandante de Fuerzas Especiales** para esa época, comandante del grupo de soldados de las Fuerzas Especiales, indicando además que ERIKA RODRÍGUEZ OLARTE es Defensor de Derechos Humanos y actualmente tiene esquema de seguridad con la Unidad Nacional de Protección.

4. **Fundamentos de derechos:** 4. *“Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”:*

- 4.1. **Responsabilidad de la entidad accionada:** En los procesos contenciosos la Nación estará representada por la “persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”, por lo que en este caso particular, las Fuerzas Militares-Ejército Nacional está representada por: **El ministerio de Defensa Nacional** a través del **Ministro de Defensa Nacional**, ocupando dicho cargo el Dr. **Luis Carlos Villegas Echeverri** o por quien haga sus veces como superior jerárquico de las Fuerzas Militares-Ejército Nacional, para que respondan extra-contractualmente por lo

ocurrido el día 15 de Febrero de 2014 al atentar contra la integridad personal de la lideresa de la comunidad LGTBI trans **Erika Rodríguez Olarte**, causando lesiones en su humanidad, agredirla con granadas lacrimógenas, agredirla en su dignidad al insultarla de manera soez y vulgar, hechos realizados por dos soldados, uno de ellos identificado con el apellido de **Palacio** y otro con acento costeño y descrito por la actora, contando con la pasividad y omisión en evitar dicha agresión por parte del comandante del grupo de fuerzas especiales Capitán **Gutiérrez**. El actuar de los soldados fue imprudente, excesivo, abusaron del derecho que les da portar armas y del uso de la fuerza, excedido en su acción funcional, pero también por OMISIÓN al permitir el Capitán **Gutiérrez** que los soldados actuaran contra los miembros de la comunidad LGTBI sin justificación alguna, es decir, OMISIÓN en el cumplimiento de sus funciones, porque su labor no estuvo dirigida a prevenir que sus subalternos no se desbordaran y actuaran por fuera del marco legal que sus funciones le permiten, es decir, no cumplió con sus funciones al ser omisivo en el debido cumplimiento de éstas.

- 4.2. **Responsabilidad extra-contractual:** No cabe duda que el actuar antes referido por parte de agentes de la fuerza pública –miembros del Ejército Nacional- está por fuera de todo procedimiento legal, contraviene normas de derecho nacional e internacional en torno a los derechos humanos y los derechos de las personas, y no existía justificación de ninguna naturaleza para que actuara de esa manera, mucho menos cuando los ciudadanos actores de esta demanda permanecían en vía pública ejerciendo su trabajo como comunidad LGTBI, en el lugar que lo han hecho por cerca de quince (15) años, es decir, no llegaron un día antes ni el mismo día, trabajo aceptado por la sociedad, sin causar comportamiento que pudiese o pretendiese alterar el orden público, sin perturbar la actividad militar o el sosiego de los mismos. Entonces, por extralimitación en sus funciones y en el uso y abuso de la fuerza y por la omisión del comandante de dicha fuerza se genera una falla en el servicio por acción y por omisión, de ahí la responsabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional en estos hechos.

Con lo anterior se causó a la señora **Erika Rodríguez Olarte y a su núcleo familiar** graves daños morales por el actuar imprudente e irreflexivo de los miembros del Ejército Nacional al actuar con abuso de autoridad, exceso de la fuerza, acometer y lanzar granadas lacrimógenas hacia la integridad de la actora –sin necesidad alguna- persona que siempre ha sido respetuosa de la autoridad en cualquier estamento, y además había acordado con el comandante del Grupo de fuerzas especiales la permanencia en lugar cercano a donde pernoctaban los soldados, pero al ocurrir la vulneración de derechos

ya indicados, el maltrato verbal, ultrajada su dignidad de ser humano, atacarla con granadas lacrimógenas y pretender desplazarla de su sitio de trabajo, generó preocupación, angustia, dolor y tristeza en el núcleo familiar en tanto durante varias semanas no pudo trabajar normalmente por el temor a ser nuevamente violentada por los militares que pernoctaban cerca del lugar antes mencionado.

4.3. **Normas relacionadas con el derecho fundamental a la integridad personal:** Con el actuar imprudente, irreflexivo, extralimitado en sus funciones, abuso de autoridad uso de la fuerza – sin mediar causa eficiente que diera lugar a ese comportamiento de los miembros del Ejército Nacional- que culminaron en las lesiones personales y vulneración de la dignidad y respeto a la actora **Erika Rodríguez Olarte**, vulnerando diversas normas de nuestro ordenamiento constitucional y legal, y de conformidad con los artículos 65 a 69 de la Ley 270 de 1.996 o Estatutaria de la Justicia se debe reparar. Entre éstas:

4.3.1. **Constitución Política de Colombia;** preámbulo, artículo 1, 2, particularmente: “*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*”, **Artículo 13.** “*Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica*”, **Artículo 16.** “*Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico*”, **artículo 24.** “*Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia*”. **Artículo 28.** “*Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley*”, **Artículo 90.** “*El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas*”, **Artículo 92.** “*Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas*”, **Artículo 217** “*...Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional*”.

4.3.2. Ley 1437 de 2011 Código Contencioso Administrativo, artículo 140, 162 y ss.

4.3.3. Al ser vulnerada en su derecho a la dignidad humana, lesionada en su integridad personal, vulnerada sus derechos humanos, agredida con el lanzamiento de granadas lacrimógenas, implementos de dotación oficial utilizados por los miembros del Ejército Nacional,



transgredieron los artículos 1º y 12 de nuestro ordenamiento constitucional, pues en él se establece que “*Colombia es un estado social de derecho... fundado en el respeto a la dignidad humana*”, dignidad que fue arrasada al ser segada y vulnerada tal como se ha expresado en líneas anteriores. Con el anterior proceder de las autoridades ya indicadas, se ha ocasionado un daño antijurídico, por lo que debe darse aplicación al artículo 90 de nuestra Carta Política que dice: “*El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas*”, el cual se aplica en concordancia con los artículos 65 a 69 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de la Justicia. La Nación Colombiana: Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional deben indemnizar a los demandantes de conformidad con la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia:

*“ART. 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”*

No cabe duda que los hechos acaecidos el 15 de Febrero de 2014 en la carrera 24 con calle 28 esquina del municipio de Tuluá Valle del Cauca, por parte de la autoridad representada en los miembros del Ejército Nacional causaron un daño antijurídico que vulneró la dignidad e integridad personal de quien fue intimidada, agredida y objeto de trato indigno por los soldados componentes del grupo de fuerzas especiales del Batallón “Batalla de Palacé” adscritos al municipio de Tuluá Valle del Cauca.

- 4.4. Existe variada jurisprudencia y decisiones gubernamentales respecto a la comunidad LGTBI y la actividad laboral que desarrolla, la cual es protegida por el Estado y siendo comunidad discriminada tienen un trato preferencial por parte de la autoridad de todo orden, civil, policial, militar, etc., protección que vulneraron los miembros del grupo de Fuerzas especiales en el municipio de Tulúa. Tales decisiones son:

- 4.4.1. Sentencia Corte Constitucional, referencia: expediente T-2384611, Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, Bogotá, D. C. 13 de agosto de 2010, de la cual retomamos los apartes sobre la igualdad:

**“2.3.1. Igualdad, naturaleza jurídica**

6. Como reiteradamente se ha dicho por la Corte constitucional<sup>2</sup>, la igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado colombiano.

---

<sup>2</sup>Se siguen, en especial, las sentencias T-291 de 2009 y T-340 de 2010.

De un lado, se trata de un principio fundante del orden político que se proyecta en el carácter general y abstracto de las leyes, elemento esencial del Estado de Derecho; y en los deberes públicos para la satisfacción de los derechos constitucionales mediante la garantía de un mínimo de condiciones materiales que faciliten su ejercicio por parte de todas las personas, desde la perspectiva social del Estado. De otro lado, posee una relación inescindible con la dignidad humana, fuente y fin de los derechos fundamentales, como atributo de todos los seres humanos de donde deriva su derecho al goce pleno de los derechos humanos por igual (Artículos 2º y 5º de la Constitución Política).

### 2.3.2. Tipos constitucionales

7. Lo anterior se hace patente desde la propia construcción normativa del artículo 13 de la Carta, en la que la igualdad se concreta a través de tres tipos de ordenación: en el inciso 1º como principio de *igualdad formal o igualdad ante la ley*, o en general ante el Derecho, al cual le **es consustancial la prohibición de discriminación que veda el establecer un trato desigual frente a algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad**, tales como la raza, el sexo, la religión y la filiación política o ideológica. A su vez se establece en los incisos 2º y 3º, una **dimensión promocional de la igualdad material o igualdad de trato**, destinada a superar las desigualdades que, de hecho, enfrentan ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados, o las personas que, por diversos motivos, se encuentran en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. **Esta dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas, que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad de oportunidades**, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la sociedad<sup>3</sup>. (Negrilla es nuestra).

8. En efecto, una de las expresiones de la cláusula de igualdad es la protección de grupos tradicionalmente discriminados o marginados, condición que en el Estado social de derecho determina a la vez un **mandato de abstención** o interdicción de tratos discriminatorios y un **mandato de intervención**, a través del reconocimiento de exigencias al Estado que le imponen realizar acciones tendentes a superar las condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.

9. En cuanto a lo primero y como resultado de la aplicación de la cláusula de igualdad formal y la prohibición de la discriminación (art. 13, inc 1 CP), comporta el deber del Estado de abstenerse de concebir normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad. Un mandato que en pos de la igualdad, proscribe tanto las **discriminaciones directas** y por las cuales se coarta o excluye a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las **discriminaciones indirectas** “que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado”<sup>4</sup>.

En cuanto a lo segundo, se habla de un **mandato de intervención**, porque para alcanzar los ideales de igualdad, es también necesario que el Estado intervenga y despliegue **actuaciones positivas** para garantizar condiciones de **igualdad real y efectiva, la igualdad de trato por parte de la ley** (art. 13, inc. 2º y 3º CP).

### EXHORTO A LAS AUTORIDADES DE POLICIA EN CASO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES

*Además de las determinaciones necesarias que el caso de la señora LAIS amerita, estima la Corte también indispensable hacer requerir la participación de diferentes autoridades, para que en el marco de sus competencias adopten las medidas necesarias tanto para asegurar el cumplimiento de las órdenes concretas del caso, como el adelanto de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, del Derecho internacional, legales y de carácter administrativo que deben regir la prostitución como fenómeno social tolerado. al*

<sup>3</sup> Al respecto, por ejemplo sentencias SU-388, SU-389 de 2005; C-371 de 2000.

<sup>4</sup> Sentencia T-291 de 2009

*ser la prostitución una actividad cuyo ejercicio no está prohibido, ni para quien la ejerce, ni para quien tiene un establecimiento de comercio dedicado a ella, están unos y otros llamados a desplegar las actuaciones de su competencia con las cuales se protejan los derechos de estos últimos, pero en particular de quienes ejercen la prostitución, no sólo para cuidar de su salud y abrir sus perspectivas de desarrollo, sino también, para asegurar las garantías laborales que en el caso de trabajar por cuenta ajena merecen...”*

4.4.2. El diario “El Espectador publicó en Mayo 1° de 2015 artículo intitulado: “Casi 22 años de sentencias a favor de la comunidad. **Los 73 triunfos de los LGBTI**”. Por: Juan Sebastián Jiménez, del que destaca algunas decisiones de la Corte Constitucional, así:

4.4.2.1. En la tutela T-539 de 1994, que analizó el veto del Consejo Nacional de Televisión a un comercial en donde aparecía una pareja gay, el alto tribunal indicó que “Los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación”. Y agregó: “El hecho de que su conducta sexual no sea la misma de la mayoría de la población, no justifica un tratamiento desigual”.

En la tutela la Corte añadió: “Los homosexuales tienen su interés jurídicamente protegido, siempre y cuando en la exteriorización de su conducta no lesionen los intereses de otras personas ni se conviertan en piedra de escándalo, principalmente de la niñez y la adolescencia. Un trato justo hacia los homosexuales tiene que basarse en el respeto, la consideración y la tolerancia, por tratarse de seres humanos titulares de los mismos derechos fundamentales de los demás en condiciones de plena igualdad, así no sean idénticos en su modo de ser a los demás”. (Subraya fuera de texto).

4.4.2.2. Tutela T-301 de 2004, en la cual se le ordenó a la Policía de Santa Marta dejar de hostigar a los homosexuales que visitaban el malecón de la ciudad.

4.4.2.3. La Sentencia C-507 de 1999 fue determinante: declaró inconstitucional la norma que señalaba como una falta al honor militar la realización de “actos homosexuales”. Entonces el alto tribunal dijo: “Incluir como falta contra el honor militar el hecho de ‘ejecutar actos de homosexualismo’ comporta un estigma a la opción homosexual y desconoce aspectos que corresponden a la esfera íntima del individuo, los cuales, si se ejercen en forma responsable y en el ámbito de su privacidad, no tendrían por qué interferir con su condición de militar”.

4.4.2.4. Asimismo, la C-431 de 2004 resultó clave: allí se declararon inconstitucionales algunos apartes del Reglamento de las Fuerzas Militares. También la tutela T-476 de 2014 eximió a las mujeres trans del requisito de la libreta militar.

4.4.3. Constitución Política de Colombia, Preámbulo

4.4.3.1. Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, **fundada en el respeto de la dignidad humana**, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Negrillas son nuestras).

4.4.3.2. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. **Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades**, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Negrillas son nuestras).

- 4.4.3.3. Artículo 5o. **El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona** y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. (Negrilla es nuestra).
- 4.4.3.4. Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. **Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.** (Negrillas fuera de texto).
- 4.4.3.5. Artículo 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
- 4.4.3.6. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, **recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.**  
**El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.** (Negrillas son nuestras).
- 4.4.3.7. Artículo 15. **Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.** (Negrillas son nuestras).
- 4.4.3.8. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
- 4.4.3.9. Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, **tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional**, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. (Negrillas son nuestras).
- 4.4.3.10. Artículo 25. **El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.** Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Negrillas son nuestras).
- 4.4.3.11. Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio
- 4.4.3.12. Artículo 28. **Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.** (Negrillas son nuestras).
- 4.4.3.13. Artículo 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, **y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.** (Negrillas fuera de texto).
- 4.4.3.14. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
- 4.4.3.15. Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

#### 4.5. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo –CPACA- (Ley 1437, Enero 18 de 2011).

- 4.5.1. Artículo 140. *Reparación directa.* En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.
- 4.5.2. Artículos 161 y siguientes.

5. **Pruebas:** Artículo 162, numeral 5: *“La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder”*.
- 5.1. **Documentales:** Poder otorgado por **Erika Rodríguez Olarte**, (directa afectada), **Orfilia Olarte Mancera** en calidad de madre de Erika Rodríguez Olarte; **Eduán Rodríguez Olarte**, **María Oneida Rodríguez Olarte**, **María Orfilia Rodríguez Olarte**, **Verónica Rodríguez Olarte**, **José Libardo Rodríguez Olarte**, **Lina María Rodríguez Olarte**, **John Jairo Rodríguez Olarte**, **Luz Marina Rodríguez Olarte** y **Luis Hernando Rodríguez Olarte** en calidad de **hermanos** de Erika Rodríguez Olarte.
- 5.1.1. Denuncia penal presentada en 20/02/2014 por Erika Rodríguez Olarte ante la Fiscalía General de la Nación, radicación 76-834-60-00187-2014-00778 (4 folios)
- 5.1.2. Denuncia penal presentada en 1/02/2014 por Erika Rodríguez Olarte ante la Fiscalía General de la Nación, radicación 76-834-60-00187-2014-00593 (3 folios)
- 5.1.3. Acta derechos y deberes de las víctimas
- 5.1.4. Solicitud de medida de protección radicación 768346000187201400593 de Febrero 07 de 2014.
- 5.1.5. Acta de medidas de seguridad y/o autoprotección para personas amenazadas del Ministerio de defensa Policía Nacional de Febrero 10 de 2014, suscrita por Erika Rodríguez Olarte y miembro de la Policía Nacional (2 folios).
- 5.1.6. Denuncia formulada ante la Personería Municipal de Tulúa en Febrero 17 de 2014 por Erika Rodríguez Olarte (2 folios)
- 5.1.7. Queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación Provincial de Buga por los hechos ocurridos el 15 de Febrero de 2014 (3 folios).
- 5.1.8. Oficio # 1016 de Abril 21 de 2014 de la Procuraduría Provincial de Buga, remitiendo la queja presentada por Erika Rodríguez Olarte
- 5.1.9. Oficios 003050 y 003051 de Mayo 06 de 2014 de las Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional suscrito por Teniente Coronel Víctor Manuel Mendoza Cubides
- 5.1.10. Denuncia presentada en Octubre 27 de 2014 ante la Personería Municipal de Tulúa por Erika Rodríguez Olarte por hechos ocurridos en Octubre 25 de 2014.
- 5.1.11. Oficio # 768346000187201400778 de Noviembre 25 de 2014 emanado de la Fiscalía segunda local de Tulúa.
- 5.1.12. Oficio de Noviembre 25 de 2014 dirigido al Tc Marco Antonio Castillo Velasco por la Fiscalía segunda local de Tulúa Valle del Cauca.
- 5.1.13. Certificación de Enero 19 de 2016 de la Personería Municipal de Tulúa Valle del Cauca, respecto a la denuncia presentada por Erika Rodríguez Olarte

- 5.1.14. Dos (2) fotografías de granada lacrimógena utilizada por los soldados del grupo fuerzas especiales el día 15 de Febrero de 2014 (2 folios).
- 5.1.15. Constancia respecto presentación solicitud de conciliación extrajudicial el día 09 de Febrero de 2016, radicación N° 43338 del 09 de Febrero de 2016, dando por agotada etapa de conciliación extrajudicial, expedida en Mayo 03 de 2016 por la Procuraduría 60 judicial I para asuntos administrativos (3 folios).

5.2. **Testimoniales:** Se llame a declarar a las siguientes personas:

- 5.2.1. **Violeta Valencia**, quien estaba presente el día y hora de los acontecimientos. Podrá indicar cómo ocurrieron los mismos, quiénes fueron los agresores, la reacción de los miembros de la comunidad LGTBI asentada en ese lugar, en general, sobre los hechos de la demanda. También podrá testimoniar sobre los daños morales y materiales causados a la actora y demás demandantes. Puede ser citada en la carrera 5 # 12-16, oficina 903, Edificio Suramericana, Cali.
- 5.2.2. **Catalina Ángeles Carmona**, podrá declarar sobre los daños morales y materiales causados a la actora y en general sobre los hechos de la demanda debido a que conoce la actividad en derechos humanos de la actora, y lo ocurrido con los militares adscritos al grupo de fuerzas especiales de Tulúa. Puede ser convocada en la carrea 5 # 12-16, oficina 903, Edificio Suramericana, Cali.
- 5.2.3. **Intendente Martha**, (de quien luego daremos su apellido) delegada de la Policía Nacional para la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, quien podrá manifestar al despacho lo ocurrido el 15 de Febrero de 2014, toda vez que ella conoció lo allí sucedido. Puede ser citada en la oficina de personal del Tercer distrito de Policía de Tulúa, calle 14 # 29A-01, teléfono 2242111.
- 5.2.4. **Intendente Stella**, (de quien luego daremos su apellido) quien acudió al sitio de los hechos en patrulla motorizada y se limitó a preguntar a la actora “hasta donde va con lo sucedido”, sin apersonarse realmente de las agresiones que le fueron puestas de presente por la lideresa de la comunidad LGTBI Erika Rodríguez Olarte. Puede ser citada a través del departamento de relaciones humanas de la Policía Nacional en la ciudad de Tulúa. Puede ser citada en la oficina de personal del Tercer distrito de Policía de Tulúa, calle 14 # 29A-01, teléfono 2242111.
- 5.2.5. **Pedro Julio Pardo**, estuvo con la actora cuando un sujeto le tomó fotografías,. Como miembro de la comunidad LGTBI

podrá informar al Despacho si el trabajo que miembros de esta comunidad realizan en la vía pública es aceptado o no, podrá informar al Despacho cuanto tiempo han permanecido la actora y sus compañeras en el lugar donde se presentó el incidente. teléfono 317-4392375. Puede ser citado en la carrera 5 # 12-16, oficina 903, Edificio Suramericana, Cali.

5.2.6. **Andrés Fabián Posso Peñaranda**, quien se dio cuenta de lo ocurrido y supo del estado emocional y moral que embargó a la actora por las lesiones causadas y el trato indigno del que fue objeto por parte de los militares del grupo de fuerzas especiales, que además se problematiza por las amenazas recibidas. También se referirá al núcleo familiar en cuanto al daño moral sufrido por lo ocurrido a su directa familiar. Puede ser citado en la carrera 5 # 12-16, oficina 903, Edificio Suramericana, Cali.

5.2.7. **Sandra Janeth Mora Morales**, oficial de la Policía Nacional en el grado de Teniente Coronel, tiene experiencia en el tema de la comunidad homosexual y LGTBI al ser directamente discriminada y retirada de las filas policiales por su orientación sexual, en tanto su dignidad fue atropellada por dicho factor, lo cual la llevó a los estrados judiciales hasta salir adelante en su proyecto de dignidad como ser humano. Podrá indicar cuál es el rol de la fuerza pública con la población discriminada LGTBI, y cómo debe actuar ante dicha comunidad no solo la Policía Nacional sino el Ejército Nacional.

### 5.3. **Oficios:**

5.3.1. Se oficie a la **Fiscalía segunda local de Tuluá Valle del Cauca**, para que remita **con nota de autenticidad**, copia completa de la investigación radicación 76-834-60-00187-2014-00778-00, en la que se encuentra la denuncia penal entablada por Erika Rodríguez Olarte respecto a los hechos del 15 de Febrero de 2014 que ocupan los hechos de esta demanda. La dirección es: Carrera 25 # 26-63, Tuluá, Valle del Cauca, telefax 2259498.

5.3.2. Se oficie al **Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses** de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca, para que remita **con nota de autenticidad** copia del examen médico legal practicado a Erika Rodríguez Olarte, ordenado por la Fiscalía segunda local de Tuluá, en el que debe constar los días de incapacidad y secuelas por la lesión causada con la granada lacrimógena. Se pide este documento a Medicina Legal porque extrañamente no aparece en la carpeta de la fiscalía antes mencionada, y tampoco la Fiscalía segunda local unidad de

indagación no da respuesta al derecho de petición presentado en Enero 25 de 2016 por Erika Rodríguez Olarte.

- 5.3.3. Se oficie al **Comandante del Batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de la ciudad de Buga**, para que dé respuesta al oficio # 1016 RC-0352 de la Procuraduría Provincial de Buga, tal como se pide en el segundo párrafo del oficio # 003050 de Mayo 06 de 2014, oficio suscrito por el TC Víctor Manuel Mendoza Cubides, oficial de operaciones Tercera Brigada. (Se debe anexar copia oficio 003050)
- 5.3.4. Se oficie al **Comandante del Batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de la ciudad de Buga**, para que dé respuesta al oficio remitido por la Fiscalía segunda Local de Tuluá Valle del Cauca, acorde a respuesta dada a Erika Rodríguez Olarte en oficio de Noviembre 25 de 2015. (Se debe anexar oficio d de la Fiscalía).
- 5.3.5. Se oficie al **Comandante del Batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de la ciudad de Buga** para que entregue la respuesta que indica a oficio de la Procuraduría, pero el cual hasta el momento de presentar el medio de control ha existido omisión en la misma, desconociendo lo que dijo en su momento: *“En atención a lo anterior, se requiere que esta unidad táctica adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, **teniendo en cuenta que son integrantes de la comunidad LGTBI.** De la misma manera **deberán dar respuesta a la solicitud del peticionario, a la Personería Municipal de Tuluá y a esa Provincial... dentro de los términos legales, y enviar copia de las acciones adelantadas a esta unidad operativa menor con plazo 12 de Mayo de 2014”***. (Negrillas sin subraya son nuestras). Remita entonces copia de la investigación disciplinaria adelantada por los hechos en los que fue agredida la lideresa en derechos humanos de la comunidad LGTBI, Erika Rodríguez Olarte, y de los oficios enviados al peticionario, a la Personería Municipal de Tuluá y a la Procuraduría Provincial.
- 5.3.6. Se oficie al **Comandante del batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de la ciudad de Buga**, para que dé respuesta a solicitud en Noviembre 25 de 2014 por parte de la Fiscalía segunda local de Tuluá, Valle del Cauca indicando: *“... así mismo se solicitó al teniente coronel Marco Antonio Castillo Velasco, comandante del Batallón Palacé de Buga, informar a este despacho para la fecha del 14 de Febrero del año en curso, qué patrulla operaba en el sitio de los hechos y cuántas personas la integraban. Teniéndose que aún a la fecha no ha llegado respuesta integral a la respectiva orden, por lo cual se procederá a*



*reiterar el cumplimiento de lo solicitado por esta Fiscalía y una vez se obtenga la información necesaria se procederá la decisión que corresponda frente al referido caso”, documento suscrito por Rubiela Ospina Cardona, fiscal segunda local. De ahí que en la misma fecha –Noviembre 25 de 2014– la Fiscalía remite nuevo oficio al Teniente coronel **Marco Antonio Castillo Velasco**. Solicitando la información anterior, además de “Así mismo se requiere información con respecto a reporte alguno que se presentara por parte de estas patrullas, sobre la necesidad de utilizar elementos y/o armas asignadas al grupo para el evento de algún tipo de disturbio, en caso cierto la instrucción entregada a los uniformados por el uso de estos contra la ciudadanía”. Debemos indicar la contumacia del Teniente Coronel Castillo Velasco y/o del Comandante del Batallón “Batalla de Palacé” al no responder el requerimiento de la Fiscalía segunda local de Tulúa, el que ya se hizo en dos ocasiones, en tanto a la Fiscalía no ha llegado respuesta, desconociendo que es un deber de la autoridad militar actuar en consonancia, armonía y colaboración con la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía General de la Nación y no puede ni debe evadir la información solicitada. Por lo tanto se debe reiterar por parte del Juzgado administrativo lo peticionado por la Fiscalía de Tulúa (bastardillas) aún no respondido por la comandancia militar.*

5.3.7. Se oficie al **Comandante del Batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” de la ciudad de Buga**, para que informe al Despacho a qué miembro o miembros del Ejército Nacional y/o unidad táctica y/o grupo de fuerza especial adscrito al Batallón de artillería N° 3 “Batalla de Palacé” le entregaron granadas lacrimógenas numeradas 410 MODELO DANGER FOR USE 9220 CNS... NY 11803. Ante la dificultad para identificar en la fotografía la granada lacrimógena, se debe requerir a la comandancia del mencionado batallón la cantidad de granadas entregadas y numeración de cada una de éstas a dicho grupo especial antes indicado.

6. **Cuantía:** Art. 162, numeral 6: *“La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”*. La competencia radica en el **juzgado administrativo (reparto)**- por el factor objetivo, territorial y la cuantía de este proceso, que es menor a **quinientos (500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes**, es decir, en la cuantía se estima acorde a lo peticionado en daños morales para la actora, que actualizado al salario mínimo mensual legal vigente asciende a la suma de **sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos (\$68.945.400)** según lo peticionado en el Art. 155, numeral 6 del C. C. A. (Ley 1437 de 2011). En efecto, se trata de un proceso especial de reparación directa en ejercicio de la acción del

medio de control contemplada en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

7. **Notificación:** *“El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”:*
- 7.1. El accionante: **Erika Rodríguez Olarte:** Calle 4B # 19-80, Barrio Jorge Eliécer Gaitán, teléfono 310-8407489, Tuluá-Valle del Cauca, correo electrónico: erika\_1984 @live.com
- 7.2. El accionado: **Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Ejército Nacional** representada por el señor Ministro de Defensa Nacional, o a quien haga sus veces al momento de la notificación del medio de control: Avenida El Dorado, carrera 52, Centro Administrativo Nacional “CAN”, Edificio Ministerio de Defensa Nacional, conmutador 3150111, Bogotá, D. C.
- 7.3. El interviniente: **Agencia jurídica nacional defensa del Estado**, su representante legal es la Directora de esta entidad, Dra. Adriana María Guillén Arango, o quien haga sus veces en el momento de la notificación del medio de control, en la Calle 70 # 4-60, teléfono 2558955, fax 2558933, Bogotá, D. C. Envío los correos electrónicos encontrados en la página web de la Agencia, así: proceso@defensajuridica.gov.co, buzonjudicial@defensajuridica.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co
- 7.4. El apoderado judicial: **Jorge Danilo Guarín Obando** en la carrera 5 # 12-16, Oficina 903, Edificio Suramericana, Santiago de Cali-Valle del Cauca, teléfono 313-6862684, **correos electrónicos: daniloguarin@gmail.com - daniloguarin@yahoo.com**
8. **Jurisdicción y competencia:** Por razón de la naturaleza del asunto, la cuantía de las pretensiones, y el lugar donde se presentaron los hechos y dependencias que dan origen al medio de control de reparación directa, tal como se encuentran relatados en el acápite respectivo, es competente el Juzgado Administrativo del circuito de la ciudad de Guadalajara de Buga (reparto) para conocer esta demanda en primera instancia por el trámite del proceso ordinario según los artículos 140, 162 y ss., del CPACA.

Cordialmente,

---

Jorge Danilo Guarín Obando  
C. C. # 16.613.613 de Cali  
T. P. # 104.906 del CSJ  
Apoderado judicial